



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

El Alto, 21 de enero de 2021
PGE-DESP N° 00068/2021
SPDRLE-DGDDHMA

Ref.: Remite escrito de información y observaciones
a la Comunicación AL BOL 4/2020 de
Procedimiento especial

De mi mayor consideración:

El Estado Plurinacional de Bolivia a tiempo de saludar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene a bien remitir el escrito de información y observaciones a la Comunicación AL BOL 2/2020 ("Comunicación").

Con este motivo, hago propicia la oportunidad para reiterar a usted, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Wilfredo Chávez Serrano
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



Señora:
Verónica Michelle Bachelet Jeria
ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Ginebra - Suiza
WFCS/PGM/JRBB/MNMP
C.c. Archivo




COMUNICACIÓN CONJUNTA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

“SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL BOL 4/2020”

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN BOLIVIA, DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

El Alto, enero de 2021

Presentado por:



Abog. Wilfredo Franz David Chávez Serrano
Procurador General del Estado

Abog. Patricia Guzmán Meneses
Subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado

Abog. Jhanneth del Rosio Bustillos Bustillos
Directora General de Defensa en Derechos Humanos y Medio Ambiente

El Alto, Bolivia





ÍNDICE

I.	REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	1
	A. Representación legal del Estado.....	1
	B. Comunicaciones Oficiales	1
II.	ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2
III.	ARGUMENTOS ESTATALES EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 3	
	A. Medidas, legislación y políticas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar las condiciones de detención en los centros penitenciarios, en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, tales como el acceso a la atención médica adecuada.	4
	B. Medidas aplicadas en los centros penitenciarios de Bolivia para proteger a los detenidos y el personal penitenciario de la pandemia COVID-19.	6
	C. Medidas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar el debido proceso durante el período de confinamiento por el COVID-19.....	10
	D. Medidas alternativas adoptadas para facilitar la comunicación de los detenidos con familiares y abogados, acerca de su situación de salud.	11
	E. Medidas adoptadas por el Estado boliviano para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios durante la pandemia del COVID-19.	12
	F. Hechos acontecidos con relación al fallecimiento del Señor Secundino Pari Choque y la situación del Señor Oscar Gumercindo Chambi.	14
IV.	CONCLUSIONES	15



PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

RESPUESTA DE ESTADO A LA COMUNICACIÓN CONJUNTA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES "AL-BOL 4/2020"

I. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

A. Representación legal del Estado

1. De conformidad a lo establecido en los Artículos 229 y 231 (1) de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia ("CPE") y el Artículo 8, numeral 1 de la Ley N° 064 ("Ley 064"), de 5 de diciembre de 2010, modificada en parte por la Ley N° 768, de 15 de diciembre de 2015, la Procuraduría General del Estado ("Procuraduría" o "PGE") es la institución de representación jurídica pública que ejerce la función suprema de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, entre cuyas funciones está la de defender judicial y extrajudicialmente al Estado asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales o extrajudiciales en materia de derechos humanos, en el marco de la Constitución y la ley.
2. De conformidad a lo establecido en el Artículo 230, Parágrafo II, de la CPE, mediante Decreto Presidencial N° 4390¹ de 12 de noviembre de 2020, se designó a Wilfredo Franz David Chávez Serrano como Procurador General del Estado, quien en virtud al mandato constitucional y al Artículo 11, Parágrafo I, de la Ley N° 064, se constituye en el representante legal del Estado en el marco de la defensa de los derechos, intereses y patrimonio de Bolivia, encontrándose por tanto, debidamente legitimado para responder la presente Comunicación Conjunta de los Procedimientos Especiales "AL-BOL- 4/2020" de la Organización de las Naciones Unidas.
3. Asimismo, mediante Resolución Suprema N° 27259² de 23 de noviembre de 2020, se designó a Patricia Guzmán Meneses, como Subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, quien junto a Jhanneth del Rosio Bustillos Bustillos, en su calidad de Directora General de Defensa en Derechos Humanos y Medio Ambiente, designado mediante Resolución Procuradural N° 169/2020³ de 1 de diciembre de 2020, se encuentran plenamente acreditados para presentar el presente respuesta de Estado.

B. Comunicaciones Oficiales

4. El Estado boliviano solicita respetuosamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

¹ Decreto Presidencial N° 4390. (Anexo 1)

² Resolución Suprema N° 27259. (Anexo 2)

³ Resolución Procuradural N° 169/2020. (Anexo 3)



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

Unidas para los Derechos Humanos ("OACNUDH") que la remisión de los comunicados oficiales sea realizada al siguiente correo institucional de la Dirección General de Defensa en Derechos Humanos y Medio Ambiente:

direccionddhh@procuraduria.gob.bo

II. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

5. El 21 de septiembre de 2020, la OACNUDH, a través de la subdivisión de Procedimientos Especiales remitió al Estado Plurinacional de Bolivia ("Estado boliviano" o "Bolivia") la Comunicación AL BOL 4/2020 ("la Comunicación"), misma que fue enviada de manera conjunta por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
6. A través de la mencionada Comunicación, la OACNUDH expresó al Estado que tenía conocimiento respecto de la situación de las personas privadas de libertad en Bolivia, durante la Pandemia COVID-19.
7. Específicamente, la OACNUDH señaló de forma particular que tenía información acerca de la situación del penal de San Pedro, de la ciudad de La Paz, mencionando que; el 7 de julio de 2020 el Sr. [REDACTED] falleció debido a problemas respiratorios, asimismo, que el Sr. [REDACTED] otro recluso del penal de San Pedro, habría mostrado síntomas relacionados con el COVID-19 y que el mismo no solo no recibió atención médica, sino que no fue aislado.
8. En vista de esta situación, la OACNUDH solicitó al Estado cooperación y observaciones sobre los siguientes aspectos:

1. "Sírvasse proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba.

2. Sírvasse proporcionar información detallada sobre las medidas, la legislación y las políticas adoptadas por el gobierno boliviano para garantizar que las condiciones de detención en los centros penitenciarios de Bolivia cumplan con las normas internacionales de derechos humanos, tales como el acceso a una atención médica adecuada.

3. Sírvasse proporcionar información sobre las medidas aplicadas en los centros penitenciarios de Bolivia para proteger a los detenidos y al personal penitenciario de la pandemia COVID-19 en particular, en lo que respecta al suministro gratuito



y regular de productos de higiene y protección personal, las medidas de distanciamiento físico y el diagnóstico y tratamiento médico de los detenidos y el personal penitenciario con síntomas asociadas al COVID-19.

4. *Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para garantizar el debido proceso, y en particular el derecho a la defensa efectiva y a un juicio imparcial, transparente, efectivo y sin dilaciones.*

5. *Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el gobierno boliviano para facilitar medidas alternativas de comunicación entre familiares, abogados y las personas detenidas y también en la manera que se transmite información sobre su situación de salud.*

6. *Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas o previstas para reducir más eficazmente el hacinamiento entre la población detenida, por ejemplo mediante la conmutación de penas, clemencia, el arresto domiciliario, y/o programas de liberación selectiva, en particular con respecto a las personas con situación vulnerables."*

9. Asimismo, esta instancia internacional otorgó al Estado boliviano un plazo de 60 días para remitir la información solicitada e informó que transcurrido este plazo la Comunicación y toda respuesta recibida por Bolivia, se harán públicas a través del sitio web de informes de comunicaciones, además que se elevará un informe habitual al Consejo de Derechos Humanos.
10. El Estado boliviano, a través de nota PGE-DESP-SPDRLE-DGDDHMA N° 1820, de 20 de noviembre de 2020, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores gestione la ampliación de plazo para la presentación del mismo, a fin de contar con mayor información. Es así que, por medio de correo electrónico se hizo la solicitud a la OACNUDH, organismo que comunicó al Estado boliviano, que según las normas y procedimientos, la comunicación ya se hizo pública, empero que, si el Estado remitía información, ésta igualmente sería publicada.

III. ARGUMENTOS ESTATALES EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

11. En virtud a la solicitud realizada por la OACNUDH, el Estado boliviano responderá de manera precisa e integral desarrollando los siguientes aspectos; *A)* las medidas, legislación y políticas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar las condiciones de detención en los centros penitenciarios en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, tales como el acceso a la atención médica; *B)* las medidas aplicadas en los centros penitenciarios de Bolivia para proteger a los detenidos y el personal penitenciario durante la pandemia COVID-19; *C)* las medidas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar el debido proceso durante el periodo



de confinamiento por el COVID-19; D) las medidas alternativas adoptadas para facilitar la comunicación de los detenidos con sus familiares y abogados acerca de su situación de salud; E) las medidas adoptadas para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios durante la pandemia provocada por el COVID-19; y por último F) los hechos acontecidos con relación al fallecimiento del Señor [REDACTED] la situación del Señor [REDACTED] en el penal de San Pedro.

A. Medidas, legislación y políticas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar las condiciones de detención en los centros penitenciarios, en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, tales como el acceso a la atención médica adecuada.

12. El Estado boliviano a través de la CPE en sus Artículos 73¹ y 74⁵ reconoce los derechos de las personas privadas de libertad, al igual que todos los derechos fundamentales y garantías que asiste a toda persona, del mismo modo, reconoce que el derecho a la salud es un derecho universal que no puede verse limitado por la privación de libertad, por lo que el Estado boliviano garantiza que las condiciones de detención en los centros penitenciarios cumplan con las normas internacionales de los derechos humanos. Es en ese marco constitucional, el Estado ha venido implementado políticas, específicamente en resguardo de los derechos humanos de esta población en situación de vulnerabilidad.
13. Asimismo, el Estado boliviano a través del Ministerio de Gobierno y su Dirección General de Régimen Penitenciario ("DGRP") conforme lo dispuesto por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión N°2298 ("Ley 2298") de 20 de diciembre de 2001, tiene la atribución de formular, dirigir, coordinar y administrar las políticas en los siguientes ámbitos: Régimen Penitenciario, Rehabilitación y Reinserción Social, así como la administración de todos los recintos penitenciarios del país, atribución que es ejercida a través de la.
14. En ese contexto, el año 2006 el Ministerio de Gobierno a través de la DGRP, presentó el estudio de la "Situación de las Cárceles en Bolivia", documento que identificó aspectos fundamentales de la crisis del sistema penitenciario nacional. Posteriormente, el 2016 presentó el documento "Estrategia hacia una reforma penitenciaria 2016-2020"⁶.

¹ Artículo 73. I. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. II. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor, intérprete, familiares y personas allegadas. Se prohíbe la incomunicación. Toda limitación a la comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos, y durará el tiempo máximo de veinticuatro horas.

Artículo 74. I. Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. II. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios.

⁶ Disponible en: <https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-defensorial-votar-la-mirada-a-las-carceles-2018.pdf>, página 16 (Verificado el 13 de enero de 2021)



15. En ese marco, el Ministerio de Gobierno y la DGRP, han venido desarrollando políticas públicas en beneficio de las personas privadas de libertad, primordialmente en las temáticas de trabajo, infraestructura carcelaria, educación y salud, dentro de las cuales a modo de contextualizar el escenario que nos corresponde, podemos destacar las siguientes:

- i) **El Plan General de Desarrollo Económico y Social**, en el marco del Desarrollo Integral para el Vivir Bien 2016-2020, que tiene 13 pilares fundamentales. Dentro de los cuales, la formulación de políticas para el Sistema Penitenciario boliviano se encuentra contemplado en el Pilar 11, *“Soberanía y transparencia en la gestión pública”*, Meta 3, *“Seguridad Ciudadana para una Vida sin Violencia”*, Resultado 8, *“Se cuenta con un sistema penitenciario con enfoque humanístico y se ha mejorado la situación de las personas privadas de libertad en términos de hacinamiento y habitabilidad en los centros penitenciarios, incluyendo infraestructura, equipamiento y tecnología”*⁵.
- ii) **Estrategia hacia una reforma penitenciaria 2016-2020**, elaborado por el Ministerio de Gobierno y la DGRP el año 2016, procurando abordar como marco referencial la problemática penitenciaria de acuerdo a las características particulares de cada territorio y los requerimientos concretos en los ejes de intervención, focalizando las acciones estratégicas en la reinserción social y seguridad de las personas privadas de libertad.
- iii) **Lineamientos Curriculares y Metodológicos para Educación Alternativa en Contexto de Encierro**, política establecida en coordinación con el Ministerio de Educación a través de la Resolución Ministerial N°2690/2017⁶.
- iv) **Centros de Apoyo Integral Pedagógico**, son espacios educativos creados en el ámbito nacional para atender de forma exclusiva a las niñas, niños y adolescentes que son hijas, hijos o dependientes de personas privadas de libertad.
- v) **Proyecto de Apoyo con Material deportivo y/o de Premiación a los Centros Penitenciarios y Rehabilitación**, implementado por el Ministerio de Deportes a través del Viceministerio de Formación Deportiva.
- vi) **Programa “Mi Salud”**, que aplica programas nacionales de atención en centros penitenciarios a nivel nacional. Es así, que la cobertura de atenciones médicas ascendió de 26.065 en 2015, a 38.035 en 2016, a 57.766 en 2017 y 69.395 en 2018⁷.

16. Ahora bien, de acuerdo a lo descrito *ut supra*, es evidente que el Estado, diseñó e implementó políticas destinadas a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad en el territorio

⁵ Disponible en: <http://vpc.planificacion.gob.bo/pdes>, página 161 (Verificado el 13 de enero de 2021)

⁶ Disponible en: <https://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/veave/dgea-10--Lineamientos-curriculares-y-metodologicos-para-la-educacion-alternativa-en-contextos-de-encierro.pdf> (Verificado el 13 de enero de 2021)

⁷ Disponible en: <https://indocs.org/es/A-HRC/WG.6/31/BOI.1> (Verificado el 13 de enero de 2021)





nacional, sin embargo, existen dos aspectos que ameritan señalarse, los cuales implicaron la interrupción de los avances que se registraban hasta noviembre de 2019; el primero, referido al Proyecto de Apoyo con Material deportivo y/o de Premiación a los Centros Penitenciarios y Rehabilitación, mismo que tuvo que ser suspendido debido al Decreto Supremo N° 4257 de 4 de junio de 2020, el cual modificó la estructura del Órgano Ejecutivo y suprimió el Ministerio de Deportes. El segundo aspecto, tiene que ver con la falta de voluntad política por parte del gobierno transitorio para impulsar el *Pilar 11* del Plan General de Desarrollo Económico y Social.

17. Sin embargo, considerando el actual contexto político – económico y social, el Estado a través del gobierno constitucional y de derecho, recientemente posesionado, se compromete a reanudar aquellos programas que fueron interrumpidos y a identificar otras necesidades propias de las personas privadas de libertad que hayan surgido a raíz de la pandemia.

B. Medidas aplicadas en los centros penitenciarios de Bolivia para proteger a los detenidos y el personal penitenciario de la pandemia COVID-19.

18. Mediante Decreto Supremo N° 4179 de 13 de marzo de 2020, el gobierno transitorio declaró Emergencia Nacional por la presencia de casos de COVID-19 en territorio boliviano. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 4199 de 21 de marzo de 2020, declaró cuarentena total en todo el territorio nacional a partir del 22 de marzo hasta el 4 de abril de 2020, determinando las siguientes excepciones:

- a) *“Servicios de salud del sector público y privado;*
- b) *Policía Boliviana;*
- c) *Fuerzas Armadas;*
- d) *Instituciones, empresas de servicios públicos e industrias públicas y privadas.*
- e) *Entidades financieras bancarias y entidades financieras no bancarias, públicas privadas o mixtas.*
- f) *Entidades públicas, instituciones privadas y particulares, que brindan atención y cuidado a población vulnerable, debiendo establecer prioridades y la asignación del personal estrictamente necesario.*
- (...)
- a) *Los medios de transporte autorizados para atender emergencias que se puedan presentar, previa autorización de la entidad competente;*
- b) *Los medios de transporte para el traslado del personal de los servicios de salud del sector público y privado, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Medios de comunicación y otros que por la naturaleza de servicio estratégico incluído aquellas dedicadas al abastecimiento de artículos de primera necesidad,*



farmacéuticos y que brindan atención y cuidado a la población vulnerable que deban desarrollar actividades”¹⁰.

19. Ante esta emergencia sanitaria frente a la pandemia por el COVID-19, el Área de Salud, Rehabilitación y Reinserción Social de la DGRP, en el mes de marzo de este año inicialmente elaboró el “*Plan de Acción y Contingencia en centros penitenciarios frente al coronavirus COVID-19*”¹¹, el cual fue oportunamente remitido a todas las Direcciones Departamentales del Régimen Penitenciario, a fin de ser socializado con la población privada de libertad, equipos multidisciplinarios y personal de seguridad, para prevenir la propagación de la enfermedad en los centros penitenciarios.
20. Asimismo, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria (“DNSP”) mediante Memorándum Circular N° 034/2020¹², dispuso poner en conocimiento de toda la población penitenciaria, la adopción de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) y la Organización Panamericana de la Salud (“OPS”), así como la implementación de medidas preventivas en cuanto al ingreso de visitas de personas nacionales o extranjeras, con posibles síntomas relacionados con el COVID-19, la prohibición del ingreso al Recinto Penitenciario, debiendo solo acceder a entrevistas con las precauciones y medidas de bioseguridad, como ser el uso obligatorio de barbijo, evitar el saludo de mano y otras medidas necesarias, todo esto con la finalidad de evitar posibles contagios con el personal de régimen y las personas privadas de libertad.
21. A objeto de complementar la respuesta a la solicitud realizada, el Estado boliviano tiene a bien remitir adjunto al presente, el Informe No. 021/2020 de 21 de octubre de 2020, elaborado por la DNSP, remitido por el Comandante General de la Policía Boliviana, respecto a las disposiciones que se emitieron a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud y prevención del COVID-19 a todas las personas privadas de libertad y funcionarios públicos que trabajan en los recintos penitenciarios en Bolivia¹³.
22. En ese marco, la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, mediante el área de salud, realizó pruebas de COVID-19 a las personas privadas de libertad de los centros penitenciarios de San Sebastián varones y San Pablo de Quillacollo. Así también, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba realizó la dotación de vitaminas para las niñas y niños que viven con sus mamás en el centro penitenciario de San Sebastián mujeres¹⁴.
23. Por otra parte, ante el brote de COVID-19 en los diferentes recintos penitenciarios la Defensoría del Pueblo en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (“SEDES”) La Paz, realizaron

¹⁰ Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/1199> (Verificado el 13 de enero de 2021)

¹¹ “Plan de Acción y Contingencia en centros penitenciarios frente al coronavirus COVID-19”. (Anexo 4)

¹² Memorándum Circular N° 034/2020 de 10 de marzo de 2020, emitido por Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. (Anexo 5)

¹³ Informe No. 021/2020 de 21 de octubre de 2020, elaborado por la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. (Anexo 6)

¹⁴ Informe DP-ADCDH-0001/2020 de 28 de octubre de 2020, emitido por la Defensoría del Pueblo (Anexo 7)



la atención médica de las personas privadas de libertad contagiadas por el COVID-19 en el Penal de San Pedro¹⁵, así como el rastillaje y las pruebas rápidas para su detección.

24. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo gestionó ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la donación de medicamentos y kits de higiene para el “PC-2 mujeres” del Centro de Rehabilitación de Santa Cruz – Palmasola; y la habilitación de áreas de aislamiento con equipamiento y medicamentos para la atención de enfermos de COVID-19¹⁶.
25. Si bien el Estado boliviano a través de sus diferentes entidades públicas ha generado acciones de promoción, prevención y contención frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19, es innegable que las mismas fueron insuficientes, ello sumado a que lamentablemente el gobierno de transición de Jeanine Añez no brindó las condiciones para que las medidas fueran efectivas, generando de esta manera una situación en desmedro de la sociedad boliviana en su conjunto, y en particular de las personas privadas de libertad, que es una población bajo directa responsabilidad del Estado.
26. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las medidas adoptadas en su momento, de alguna forma, evitaron que se genere una crisis sanitaria en los centros penitenciarios, pues desde el 12 de marzo de 2020, es decir dos días después que se registró el primer caso en Bolivia, a noviembre de 2020, se implementaron cuatro (4) protocolos específicos elaborados por el Área de Salud, Rehabilitación y Reinserción Social de la DGRP, destinados a prevenir, atender y contener la pandemia:
- a. **“Plan de Acción y contingencia en Centros Penitenciarios frente al CORONAVIRUS (COVID-19)”¹⁷**, implementado el 12 de marzo de 2020, el cual determina medidas de prevención, promoción y otras acciones en coordinación con el Ministerio de Salud y el SEDES para reducir los riesgos de introducción y diseminación del COVID-19 en la población privada de libertad de los Recintos Penitenciarios de Bolivia.
 - b. **“Plan de Contención en Centros Penitenciarios de Bolivia frente al CORONAVIRUS (COVID-19)”¹⁸**, mismo que entró en vigencia el 27 de marzo de 2020, el cual determina una serie de medidas destinadas a la prevención del COVID-19, a fin de reforzar el primer plan, el mismo que tomó en cuenta las recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS.



¹⁵ Disponible en: <https://www.facebook.com/DPDefensorialaPaz/> (Verificado el 13 de enero de 2021)

¹⁶ Ver anexo 7.

¹⁷ Ver anexo 4.

¹⁸ “Plan de Contención en Centros Penitenciarios de Bolivia frente al CORONAVIRUS (COVID-19)”. (Anexo 8)



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

- c. “Plan de Intervención y Evaluación frente a la Emergencia Sanitaria de COVID-19 en los Centros Penitenciarios de Bolivia”¹⁹, implementado el 11 de mayo de 2020, el mismo se consideró como la base para el accionar del personal penitenciario frente a la pandemia por el COVID-19 en los centros penitenciarios de Bolivia y que primordialmente fue dirigido al personal médico, administrativo y policial que cumple funciones al interior de los centros penitenciarios.
- d. “Plan de Prevención contra la Reinfección/Rebote de Coronavirus (COVID-19) en Centros Penitenciarios de Bolivia”,²⁰ implementado el 5 de octubre de 2020, mismo que determinó una serie de medidas destinadas a la prevención del COVID-19 dentro de los Recintos Penitenciarios del país, las cuales deben ser consideradas a fin de evitar el rebote de la enfermedad.

27. Es así que, de acuerdo a la información proporcionada por la DGRP al 6 de noviembre de 2020, se reportaron 561 casos positivos de COVID-19, de los cuales se tiene 508 recuperados, 50 fallecidos y 3 continúan positivos.

REPORTE NACIONAL COVID- 19

	POSITIVOS	SOSPECHOSOS	RECUPERADOS	FALLECIDOS
LA PAZ	0	0	250	22
ORURO	0	1	2	2
POTOSI	0	0	0	0
COCHABAMBA	3	12	10	9
CHUQUISACA	0	5	21	0
TARIJA	0	0	38	3
PANDO	0	0	28	0
BENI	0	0	34	0
SANTA CRUZ	0	0	125	14
TOTAL	3	18	508	50

Fuente: Informe CTTE: DGRP/ASRyRS/316/2020 de 13 de noviembre de 2020, emitido por la DGRP²¹.

¹⁹ “Plan de Intervención y Evaluación frente a la Emergencia Sanitaria de COVID-19 en los Centros Penitenciarios de Bolivia”. (Anexo 9)

²⁰ “Plan de Prevención contra la Reinfección/Rebote de Coronavirus (COVID-19) en Centros Penitenciarios de Bolivia”. (Anexo 10)

²¹ Informe CTTE: DGRP/ASRyRS/316/2020 de 13 de noviembre de 2020, emitido por la DGRP. (Anexo 11)



C. Medidas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar el debido proceso durante el período de confinamiento por el COVID-19.

28. Al respecto, resulta necesario señalar que el contenido del debido proceso se encuentra consagrado en la CPE de Bolivia en los Artículos 115²² y 117²³; y en la Ley N° 463 “Servicio Plurinacional de Defensa Pública” de 19 de diciembre de 2013, que creó el Servicio de Defensa Pública (“SEPDEP”), institución encargada del régimen de defensa penal pública de las personas denunciadas, imputadas o procesadas penalmente y cuya naturaleza jurídica consagra el derecho a la defensa como un derecho fundamental.
29. En ese sentido, el Estado boliviano a través del SEPDEP impulsó actividades a fin de garantizar el derecho al debido proceso de las persona privadas de libertad durante la pandemia por COVID-19²⁴, dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes:
- Primero, el SEPDEP puso en conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, de la Dirección General de Lucha Contra la Violencia y a la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, el rol de turnos de los Defensores Públicos²⁵ a nivel Nacional, a efectos de notificación y coordinación.
 - Segundo, ante las medidas tomadas por el Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria, el SEPDEP dio a conocer a la población en general, mediante redes sociales, que los servicios de esta institución se estaban desarrollando con normalidad y de forma ininterrumpida²⁶.
30. De la misma forma, la Fiscalía General del Estado mediante Instructivo FGE/JLP N° 090/2020²⁷, instruyó a los Fiscales Departamentales designar fiscales de materia de turno permanentes en sede fiscal, además de médicos forenses, para la atención de casos graves, relevantes o en flagrancia y aquellos que requieran atención inmediata. Asimismo, en resguardo de los derechos de los privados de libertad determinó:
- La implementación de mecanismos en beneficio de las personas con detención preventiva²⁸.
 - La suspensión del marcado biométrico para imputados con medidas cautelares²⁹.

²² “Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

²³ “Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley”.

²⁴ Informe SPDP DSC-S.L.-JCCF N° 155/2020 de 19 de octubre de 2020, emitido por el del Servicio Plurinacional de Defensa Pública. (Anexo 12)

²⁵ Ley 463, artículo 38. (DEFENSORAS Y DEFENSORES PÚBLICOS) Las defensoras y defensores públicos ejercerán la asistencia jurídica y defensa penal técnica con todas las atribuciones que les otorga la Ley, asegurando su intervención en las diferentes etapas del proceso penal.

²⁶ Ver anexo 12.

²⁷ INSTRUCTIVO PGE/JLP N° 090/2020, de 21 de marzo de 2020. (Anexo 13)

²⁸ Comunicado de la Fiscalía Departamental de La Paz. (Anexo 14)

²⁹ Comunicado de la Fiscalía Departamental de La Paz, de 05 de junio de 2020. (Anexo 15)





- La implementación del TELETRABAJO a fin de evitar retardación de justicia y continuar su labor institucional³⁰.
- 31. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia al inicio de la cuarentena rígida, suspendió temporalmente labores y plazos procesales, posteriormente, mediante Circular No. 06/2020 de 6 de abril de 2020³¹, dispuso el desarrollo de audiencias a través de herramientas telemáticas o videoconferencias mediante el sistema Blackboard, por lo que el SEPDEP a través del instructivo SPDP/DNDP/WBI/N° 51/2020 de 13 de abril³², instruyó a su personal operativo participar en las audiencias judiciales utilizando las herramientas dispuestas para el efecto.
- 32. De la misma forma, en fecha 15 de abril de 2020, el SEPDEP dio a conocer a las Embajadas de Colombia, Paraguay, Argentina, Ecuador, Brasil y al Consulado de Perú la predisposición de coadyuvar a la defensa gratuita de sus nacionales, a fin de garantizar la inviolabilidad del derecho a la defensa y el acceso a la justicia de ciudadanos extranjeros³³.
- 33. En este sentido, a lo largo de la cuarentena se ha venido regularizando de manera paulatina la atención de los procesos penales, por lo que, el Estado boliviano a través de las instituciones correspondientes realizó acciones a fin de garantizar el debido proceso y la atención de los privados de libertad a través del SEPDEP.

D. Medidas alternativas adoptadas para facilitar la comunicación de los detenidos con familiares y abogados, acerca de su situación de salud.

- 34. El Estado en cumplimiento de las recomendaciones vertidas por la Organización Mundial de la salud ("OMS") y la Organización Panamericana de la Salud ("OPS") estableció los protocolos de bioseguridad, por lo que, de acuerdo al "Plan de Acción y Contingencia en Centros Penitenciarios frente al CORONAVIRUS (COVID-19)"³⁴ y en consenso con la población penitenciaria, se dispuso que las visitas de familiares y abogados en los centros penitenciarios serían restringidas en el marco del respeto de sus derechos; en ese sentido, la DNSP mediante Memorándum Circular N° 049/2020 de 17 de marzo de 2020³⁵, dispuso que los Directores de los Recintos Penitenciarios de Bolivia; (...) *"en coordinación con los representantes de la población penitenciaria (delegados), deberán socializar y determinar acciones de prevención y contención, referente al horario de ingreso de visitas, con la finalidad de evitar la propagación y contagio de Coronavirus (...)"*.
- 35. Asimismo, mediante Memorándum Circular N° 081/2020 de 15 de abril de 2020³⁶, se instruyó que:
(...) *1. Las personas autorizadas para ingresar al interior de los centros penitenciarios son el personal*

³⁰ Comunicado de la Fiscalía Departamental de La Paz, de julio de 2020 (Anexo 16)

³¹ Circular No. 06/2020 de 06 de abril de 2020, emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. (Anexo 17)

³² Instructivo SPDP/DNDP/WBI/N° 51/2020 de 13 de abril, emitido por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública. (Anexo 18)

³³ Ver anexo 12.

³⁴ Ver anexo 1.

³⁵ Memorándum Circular N° 049/2020 de 17 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. (Anexo 19)

³⁶ Memorándum Circular N° 081/2020 de 15 de abril de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. (Anexo 20)





de seguridad y el equipo multidisciplinario (médico, legal, social, psicológico y educación) (...) 2. Se prohíbe el ingreso de cualquier particular al interior de los centros penitenciarios, debiendo informar cualquier irregularidad. 3. Para el desarrollo de audiencias virtuales, en el espacio habilitado solo pueden ingresar un abogado para asistirlo, quien debe contar con los elementos de bioseguridad (Guantes y barbijo).

36. Posteriormente, la DNSP mediante Memorándum Circular N° 0111/2020 de 09 de octubre de 2020, socializó e implementó el “Plan de Prevención Contra la Reinfección/Rebote de Coronavirus (COVID-19) en los Centro Penitenciarios”³⁷ medida dispuesta por la DGRP.
37. Por otra parte es importante señalar que la Ley 2298³⁸ establece que, a momento del ingreso de una persona privada de libertad a un recinto penitenciario se toman todos los datos personales y números telefónicos de referencia de familiares en primer y segundo grado, a efectos de coordinar con el área social y se realicen las gestiones necesarias para informar de forma pronta y oportuna el estado de salud del privado de libertad y, si este presenta complicaciones de salud.
38. Por lo expuesto y de acuerdo a la información proporcionada por la DGRP, el Estado boliviano informa que durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 el equipo multidisciplinario de cada recinto penitenciario prestó la atención oportuna e informó a los familiares acerca de la situación de salud de los privados de libertad³⁹.

E. Medidas adoptadas por el Estado boliviano para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios durante la pandemia del COVID-19.

39. Es conveniente mencionar que, el Estado boliviano durante los últimos años redobló esfuerzos para aliviar el hacinamiento en el sistema penitenciario, gestionando y promoviendo la aplicación del indulto y amnistía, mismas que se hicieron efectivas mediante la promulgación de la siguiente normativa:

- Decreto Presidencial N° 1445⁴⁰ de 19 de diciembre de 2012, de Concesión del Indulto.
- Decreto Presidencial N° 1723⁴¹ de 18 de septiembre de 2013, de Indulto y Amnistía.
- Decreto Presidencial N° 2131⁴² de 14 de noviembre de 2014, de Concesión del Indulto por Razones Humanitarias.

³⁷ Ver anexo 10.

³⁸ “Artículo 21. (Registro de ingreso) A su ingreso, el interno será registrado formándose un expediente personal foliado, que contendrá los siguientes datos: [...] el interno deberá ser informado sobre su derecho de proporcionar nombres y direcciones de sus familiares y de terceros allegados a él, para que se les informe sobre su estado de salud y las decisiones de su traslado. Estos constarán en su registro”.

³⁹ Ver anexo 11.

⁴⁰ Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/1445> (Verificado el 13 de enero de 2021)

⁴¹ Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/1723> (Verificado el 13 de enero de 2021)

⁴² Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/2131> (Verificado el 13 de enero de 2021)



- Decreto Presidencial N° 2437¹³ de 1 de julio de 2015, de Amnistía, Indulto Parcial y Ampliación del Indulto.
- Decreto Presidencial N° 3030¹⁴ de 24 de diciembre de 2016, de Amnistía, Indulto Total e Indulto Parcial.
- Decreto Presidencial N° 3519¹⁵ de 03 de abril de 2018, de Amnistía, Indulto Parcial e Indulto Total.
- Decreto Presidencial N° 3756¹⁶ de 16 de enero de 2019, de Amnistía e Indulto por razones humanitarias.

40. Como resultado de estas medidas, entre el 2012 y 2018 se acogieron a este beneficio 6.563 personas privadas de libertad, de las cuales 1.578 fueron mujeres y 4.985 fueron varones¹⁷.

41. De igual forma, se promulgó la Ley N° 1173 “Ley De Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres” (“Ley 1173”), de 3 de mayo de 2019. Esta norma, tiene por objeto, procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas.

42. Es así que, bajo el principio de “La libertad es la regla y la detención es la excepción”, mismo que está desarrollado en el Artículo 11, que modifica el Artículo 232 de la Ley N° 1970, Código de Procedimiento Penal, ha determinado las causales de improcedencia de la detención preventiva, a saber:

“(…) 1. En los delitos de acción privada;

2. En los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad;

3. Cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal, debidamente certificada;

4. Cuando se trate de personas mayores de sesenta y cinco (65) años;

5. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro (4) años;

6. En los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a seis (6) años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado;

7. Cuando se trate de mujeres embarazadas;

8. Cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de un (1) año; y,

¹³ Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/2437> (Verificado el 13 de enero de 2021)

¹⁴ Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/3030> (Verificado el 13 de enero de 2021)

¹⁵ Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/3519> (Verificado el 13 de enero de 2021)

¹⁶ Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/3756> (Verificado el 13 de enero de 2021)

¹⁷ Disponible en: <https://undocs.org/es/A/HRC/WG.6/34/BOL.1> (Verificado el 13 de enero de 2021)



9. Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis (6) años o a una persona con un grado de discapacidad que el impida valerse por sí misma (...)."

13. Asimismo, durante la gestión 2020, el Estado boliviano adoptó las recomendaciones 41, 46 y 47 de la Resolución N° 01/2020, de 10 de abril de 2020, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se estableció que, los gobiernos de los Estados parte, deberán adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir contagios del COVID-19 en la población mayor en general y en particular de quienes se encuentren en residencias de larga distancia, hospitales y centros de privación de libertad. Además, de adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, debiendo dar prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.
14. Es así que, el 4 de mayo de 2020 se promulgó el Decreto Presidencial N° 4226⁴⁸ ("DP 4226"), con el objeto de establecer la concesión de amnistía o indulto por razones humanitarias en el marco de la emergencia sanitaria nacional, en todo el territorio boliviano, contra el contagio y propagación del COVID-19, dando prioridad a los sectores más vulnerables al contagio del COVID-19, tales como las personas mayores de 58 años; personas con enfermedades crónicas, avanzadas o terminales; personas con discapacidad, mujeres embarazadas o con niños lactantes; o personas que tengan bajo su custodia, niñas y niños menores de 6 años. De acuerdo a la información proporcionada por el SEPDEP, al 16 de octubre de 2020, se procesaron 246 solicitudes de indulto y 696 de amnistía, de las cuales fueron homologados 450⁴⁹.
15. Por lo expuesto, se evidencia que el Estado boliviano implementó medidas dirigidas para reducir el hacinamiento, asimismo, es importante mencionar que el número de beneficiarios en las pasadas gestiones fueron superiores a la gestión 2020, esto se debe a debilidades en la implementación del DP 4226, y lamentablemente a la poca voluntad política del gobierno transitorio de ampliar los alcances del mencionado Decreto Supremo.

F. Hechos acontecidos con relación al fallecimiento del Señor [REDACTED] y la situación del Señor [REDACTED]

46. De acuerdo con la información obtenida de la DGRP⁵⁰, en fecha 7 de julio de 2020, se encontró a [REDACTED] de 56 años de edad, sin signos vitales, posteriormente, a horas 16:30 el Médico [REDACTED] del SEDES La Paz se hizo presente en instalaciones del Penal de San Pedro a fin de verificar las razones del deceso, por ese motivo, se le realizó una prueba de

⁴⁸ Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/4226> (Verificado el 13 de enero de 2021)

⁴⁹ Ver anexo 12.

⁵⁰ Ver anexo 11.





COVID-19, la misma que dio positiva, concluyendo que la causa del deceso fue por insuficiencia respiratoria-anoxia por COVID-19.

47. Asimismo, el Director General de Régimen Penitenciario afirmó que [REDACTED] "(...) recibió atención médica oportuna, lamentablemente el rápido empeoramiento del cuadro provocó su fallecimiento sin que pudieran realizarse medidas de urgencia como su evacuación a un centro de tercer nivel"⁵¹. Ante este lamentable deceso, sus restos fueron puestos en custodia del SEDES La Paz, asimismo, conforme a la normativa en salud vigente, se procedió a la limpieza y desinfección del área ocupada por el privado de libertad, y finalmente se realizó el rastillaje para identificar posibles contagios a las personas que estuvieron en contacto con mencionado interno.
48. Cabe señalar, que [REDACTED] vivía con su hijo menor de edad, cuya situación fue puesta a conocimiento del SEDES La Paz para que aplique los protocolos correspondientes, por ejemplo, la toma de pruebas y el aislamiento correspondiente. De esta forma, se cumplieron los protocolos recomendados por la OMS y la OPS.
49. Respecto a [REDACTED], después de las respectivas averiguaciones se sabe que está acusado por el delito de *estafa con agravación de víctimas múltiples* y este encuentra con detención preventiva en el Penal de San Pedro. Cabe señalar que, en fecha 19 de julio de 2020, dio positivo a la prueba rápida de COVID-19, por lo que de acuerdo al protocolo, fue tratado, aislado y a los 21 días dado de alta, ya que el mismo no tenía ningún síntoma. Una vez restablecida su salud, fue incorporado a la población penitenciaria, resaltando que al momento, él goza de un buen estado de salud, según informa el [REDACTED] médico del Recinto⁵².
50. De lo expuesto, se evidencia que el Estado boliviano a través de las instancias correspondientes prestó atención médica a ambos internos del Penal de San Pedro, adoptando las respectivas medidas de bioseguridad y protocolos.

IV. CONCLUSIONES

51. Por lo expuesto y tras el respectivo análisis de los hechos, se tiene a bien concluir lo siguiente:

- 1) Conforme a lo expresado en el presente escrito, se establece que el Estado boliviano ha diseñado e implementado políticas destinadas a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, las mismas que tendrán continuación ya que a la fecha el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con un gobierno constitucional, democrático, electo en las urnas que hará valer las políticas diseñadas para este fin.



⁵¹ Ver anexo II.
⁵² Ver anexo II.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado


- 2) A pesar que, el gobierno transitorio no brindó las condiciones ni recursos suficientes, el Estado boliviano a través de sus diferentes instituciones, durante la pandemia por el COVID-19, ha venido implementando medidas a fin de garantizar a las personas privadas de libertad el debido proceso, el acceso a la salud y la comunicación con sus familiares y abogados.
- 3) Con relación a las medidas adoptadas a fin de reducir el hacinamiento en los recintos penitenciarios en Bolivia, el Estado boliviano ha demostrado que a lo largo de los últimos años ha implementado mecanismos destinados a reducir la población penitenciaria, promulgando Decretos Presidenciales de Amnistía e Indulto. De la misma forma en la gestión 2020, se promulgó el DP 4226, para continuar con una política pública implementada desde el 2012, a fin de reducir la población carcelaria en el contexto de la pandemia.
- 4) El Estado ha realizado una contextualización de los hechos acontecidos con relación al deceso de [REDACTED] y la situación de [REDACTED], ambos internos del Penal San Pedro de la ciudad de La Paz, por lo que considera que en el marco de los protocolos de bioseguridad y resguardando los derechos de las personas privadas de libertad, se les ha brindado la atención médica de forma oportuna.

El Alto, 21 de enero de 2021.

Respetuosamente presentado,


Willredo Franz David Chávez Serrano
Procurador General del Estado


Patricia Guzmán Menceses
Subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado


Jhanneth del Rosio Bustillos Bustillos
Directora General de Defensa en Derechos Humanos y Medio Ambiente





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

ANEXOS

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL BOL 4/2020
“INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS
PRIVADOS DE LIBERTAD EN BOLIVIA,
DURANTE LA PANDEMIA”**



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

LISTA DE ANEXOS

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL BOL 4/2020 “INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN BOLIVIA, DURANTE LA PANDEMIA”

ANEXOS

ANEXO N° 1	Decreto Presidencial N° 4390
ANEXO N° 2	Resolución Suprema N° 27259
ANEXO N° 3	Resolución Procuradural N° 169/2020
ANEXO N° 4	“Plan de Acción y Contingencia en centros penitenciarios frente al coronavirus COVID-19”
ANEXO N° 5	Memorándum Circular N° 034/2020
ANEXO N° 6	Informe No. 021/2020, emitido por la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria
ANEXO N° 7	Informe DP-ADCDH-0001/2020, emitido por la Defensoría del Pueblo
ANEXO N° 8	“Plan de Contención en Centros Penitenciarios de Bolivia frente al CORONAVIRUS (COVID-19)”
ANEXO N° 9	“Plan de Intervención y Evaluación frente a la Emergencia Sanitaria de COVID-19 en los Centros Penitenciarios de Bolivia”
ANEXO N° 10	“Plan de Prevención contra la Reinfección/Rebrote de Coronavirus (COVID-19) en Centros Penitenciarios de Bolivia”
ANEXO N° 11	Informe DGRP/ASRyRS/316/2020, emitido por la Dirección General de Régimen Penitenciario
ANEXO N° 12	Informe SPDP/DSC-S.L./JCCF/N°155/2020, emitido por el del Servicio Plurinacional de Defensa Pública
ANEXO N° 13	INSTRUCTIVO PGE/JLP N°090/2020
ANEXO N° 14	Comunicado de la Fiscalía Departamental de La Paz



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

ANEXO N° 15	Comunicado de la Fiscalía Departamental de La Paz, de 05 de junio de 2020.
ANEXO N° 16	Comunicado de la Fiscalía Departamental de La Paz, de julio de 2020
ANEXO N° 17	Circular No. 06/2020, emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia
ANEXO N° 18	Instructivo SPDP/DNDP/WBI/N° 51/2020, emitido por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública
ANEXO N° 19	Memorándum Circular N° 049/2020, emitido por la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria
ANEXO N° 20	Memorándum Circular N° 081/2020, emitido por la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria